

RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA EN AMÉRICA LATINA

RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA EN AMÉRICA LATINA

Kurt-Peter Schütt
Flavio Carucci
(Coordinadores)

Instituto Latinoamericano
de Investigaciones Sociales

Avda. San Juan Bosco con
2da. Transversal, Edif. San
Juan, piso 4, Altamira,
Caracas

Telf: 58 212 263 40 80

www.ildis.org.ve

FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG

ildis
Instituto
Latinoamericano
de Investigaciones
Sociales

Retos y perspectivas de la integración energética en América Latina

Mario García Molina
Kirsten Westphal
Raúl A. Wiener
Asdrúbal Baptista
Elsa Cardozo
Luis E. Lander
Carlos Mendoza Pottellá y Rafael Quiroz S.
Edgar C. Otálvora
Carlos Miranda Pacheco

Caracas - Venezuela
Marzo 2007

**FRIEDRICH
EBERT**

STIFTUNG

ildis
Instituto
Latinoamericano
de Investigaciones
Sociales

©Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales-ILDIS
Apartado 61712, Caracas 1060
www.ildis.org.ve
1ª edición, mayo 2007

Hecho el depósito de Ley
Depósito legal: lf81120073001757
ISBN: 978-980-6077-52-2

Producido por:



CDB publicaciones

Edición, corrección y coordinación editorial: Helena González

Diseño gráfico y montaje electrónico: Michela Baldi

Impreso en Venezuela en los talleres de Tipografía Principios

Índice

Presentación	
<i>Kurt-Peter Schütt / Flavio Carucci</i>	9
1	
La energía como motor para la integración de América Latina.....	15
<i>Mario García Molina</i>	
La interconexión energética en Latinoamérica en 2006	
La energía y los movimientos sociales en América Latina	
Propuestas para el uso de la integración energética como motor de la integración política	
Bibliografía	
2	
Flujos energéticos, cambios en la correlación de poder y relaciones internacionales: una visión comparada de la macro-región europea y las Américas	39
<i>Kirsten Westphal</i>	
Relaciones energéticas y relaciones internacionales	
Las relaciones energéticas como factor de cooperación regional e integración en América del Sur	
Conclusiones	
Bibliografía	
3	
Impacto del TLC en las iniciativas de integración energética en América Latina	71
<i>Raúl A. Wiener</i>	
Situación y perspectiva del proceso de integración energética de América Latina	
Servicios energéticos y Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos	
Identificación de aspectos del Tratado que puedan obstaculizar o favorecer el proceso de integración energética o que puedan favorecerlo	
Conclusiones	
Bibliografía	
4	
Venezuela y América del Sur: el petróleo como vínculo económico y político.....	89
<i>Asdrúbal Baptista</i>	
Petróleo y crecimiento económico: una visión general	
Venezuela y América Latina: una comparación histórica	
El mercado petrolero mundial: un ejercicio de prospección 2005-2030	
Crecimiento económico y requerimientos de petróleo: América del Sur 2005-2030	
Precios y costos en el mercado mundial	
Venezuela y América del Sur: los vínculos del petróleo	
Bibliografía	

5

La integración energética regional: factor de (in)governabilidad / (in)seguridad 101

Elsa Cardozo

Condiciones prevalecientes: la energía como cuestión de seguridad regional

Tendencias en grueso: lo energético en la gobernabilidad democrática

Opciones entre dos polos: obstáculos y posibilidades

Aproximación a recomendaciones

Bibliografía

6

La energía como palanca de integración en América Latina y el Caribe..... 113

Luis E. Lander

Antecedentes

Principales propuestas hoy en debate

¿Son complementarias o incompatibles las propuestas de integración energética discutiéndose hoy? Reflexiones para el debate

Bibliografía

7

La energía como factor activo de la integración latinoamericana 131

Carlos Mendoza Pottellá y Rafael Quiroz S.

El petróleo y el gas venezolanos como factores claves para la integración política de América del Sur y del Caribe

La política energética del gobierno de Venezuela

América del Sur y el Caribe como destinos del petróleo y del gas venezolanos.

Perspectivas a mediano y largo plazo y potenciales conflictos Norte-Sur

PetroAmérica: ¿contradicción o complementariedad con la política venezolana frente a la OPEP

A manera de conclusión

Bibliografía

8

Integración, des-integración y gasoducto del sur

Cambios políticos y sed de gas en la Suramérica de principios de milenio 163

Edgar C. Otálvora

Conflicto de nuevo milenio

Integración y des-integración

Gasoducto del sur

Fin de texto

9

Hidrocarburos en Bolivia: nacionalización-integración-relacionamiento energético con Chile191

Carlos Miranda Pacheco

Entorno energético en el que se desarrolla la nacionalización de mayo

La nacionalización del petróleo: ¿la respuesta al desarrollo pleno de los hidrocarburos en el país?

Recuento de las dos nacionalizaciones anteriores

La nacionalización de mayo, ¿igual o diferente a las anteriores?

La nacionalización y la integración energética en Sudamérica

¿Relación energética Bolivia-Chile, ¿es posible?

Bibliografía

Notas sobre los autores243

La energía como motor para la integración de América Latina

Mario García Molina

Durante la última década, la integración energética ha cumplido un papel importante en los procesos de integración latinoamericanos. No obstante, estos han ocurrido principalmente en el ámbito de los Estados, sin que se pueda hablar realmente de procesos de integración entre los pueblos. La pregunta que aborda este trabajo es cómo puede la integración energética servir de motor para la integración entre los pueblos en la región. Para responderla, y con el fin de captar un espectro más amplio de intereses que el de los Estados, se toman en cuenta aquí las demandas de los principales movimientos sociales de la región con el fin de identificar hasta qué punto éstas pueden ser alcanzadas mediante la integración energética.

Se analizan en primer lugar algunos elementos estructurales, en particular el estado de las reservas, la producción y la integración energéticas; luego se identifican los intereses de los principales movimientos sociales de la región en el campo energético; por último se plantea un conjunto de recomendaciones para que la integración energética pueda impulsar la integración regional a un nivel más profundo.

La interconexión energética en Latinoamérica en 2006

Situación actual de reservas y comercio de energéticos

Según las estimaciones geológicas, la producción mundial de petróleo comenzará su fase descendente en 2020, a lo sumo 2040 (Álvarez, 2005, p. 52)¹, con lo cual todo permite prever que ya no se descubrirán yacimientos grandes. En el período que comienza, la tendencia del precio del petróleo será al alza y ya no cabe esperar nuevamente precios bajos. Los altos precios harán rentables otras fuentes de energía, comenzando por el gas que, no obstante, será apenas un paliativo puesto que, aunque sus precios sean bajos hoy en día, seguirán la misma tendencia del petróleo a largo plazo. Finalmente, los hidrocarburos serán reemplazados por hidrógeno y otras fuentes alternativas de energía que ya están siendo aplicadas en diversos países como Islandia, España y Brasil².

1. Esta fecha puede haberse adelantado dado el gran crecimiento del consumo de China e India en los últimos años. Algunos autores consideran que el descenso ya está ocurriendo desde 2005 (Roberts, 2004).

2. Estos países, la Unión Europea, Estados Unidos, las multinacionales energéticas y las de la industria automotriz están apostando fuertemente a la investigación en esta área en donde ya funcionan numerosos prototipos. Aunque la preocupación principal es por fuentes alternativas para el transporte de automóviles, las celdas de combustible basadas en hidrógeno ya son económicamente viables en varios casos para fuentes estacionarias como hospitales, escuelas, conjuntos residenciales, industrias, etc. (Roberts, 2004).

Con el comienzo del fin de la era del petróleo y la transición a la era del hidrógeno, el papel geoestratégico de los países con reservas de productos energéticos cobra una importancia crucial. Una identificación somera de las reservas y la producción latinoamericanas es útil a la hora de establecer los elementos estructurales para el análisis geoestratégico y geopolítico de la integración. Hay que tomar en cuenta que, en todos los casos, el principal consumidor es Estados Unidos.

En petróleo, los principales importadores son Chile, Brasil, Perú y Trinidad y Tobago. Los principales exportadores son México, Venezuela, Ecuador, Colombia y Argentina. Las reservas se encuentran principalmente en los países productores más Brasil y Perú. La situación cambia cuando se analizan los derivados del petróleo, para los cuales los principales importadores son Panamá, Paraguay, Chile, Ecuador y Guyana; mientras que los exportadores son Venezuela, Trinidad y Tobago, Brasil, Argentina, Colombia y Perú. Como se mencionó anteriormente, no cabe esperar variaciones grandes en el panorama de producción o reservas, excepto por la declinación natural de los campos. En donde sí puede haber cambios es en el consumo, en caso de modificaciones en las tasas de crecimiento de los países productores, que de aumentar pueden reducir sus exportaciones de manera significativa.

En el caso del gas, que será el energético de mayor dinamismo durante las próximas décadas, los exportadores importantes son actualmente Trinidad y Tobago (de gas natural licuado), Bolivia y Argentina (por gasoducto a Brasil aunque Bolivia podría venderlo licuado por vía chilena hacia el mar). Barbados también tiene un potencial considerable en esta área. Los principales importadores son Brasil y Chile. Entre los consumidores (al tiempo que productores) importantes hay que añadir Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Argentina exporta gas a Chile y a Brasil. A futuro, las reservas no sugieren cambios importantes, excepto tal vez por la posibilidad de Venezuela de exportar gas y de Colombia en el mismo sentido³.

Casi dos tercios de las reservas gasíferas sudamericanas se encuentran en Venezuela, si bien cabe aclarar que 90% de esas reservas están asociadas a pozos petrolíferos. Como miembro de la OPEP, Venezuela está obligada a ciertas cuotas de producción de petróleo y por ello no puede ampliar voluntariamente su producción de gas, en consecuencia, más del 50% del gas natural extraído se reinyecta en los campos petrolíferos. Hace poco se empezó con la exploración de pozos gasíferos no asociados en la región de Los Llanos (que producirían entre 30 g.m³ y 200 g.m³) y existen dos pozos *offshore* en la cuenca de Maturín, con una reserva calculada de 100 g.m³.

Las reservas de gas de Bolivia y Argentina son considerables y, a diferencia de las venezolanas, son sólo de gas natural. En el caso de Bolivia, desde la privatización del sector gasífero a mediados de los años noventa, las reservas de gas se quintuplicaron hasta llegar a ser las segundas en América Latina.

La explotación de gas natural de los países de Sudamérica alcanzó en 2004 los 100 g.m³, y sus mayores productores fueron Argentina y Venezuela. Una visión histórica de la producción de gas en el subcontinente muestra una clara curva creciente en el último cuarto de siglo, sobre todo a partir

3. El caso de Colombia es ilustrativo: realmente no se ha explorado en busca de gas, sino que el gas ha sido encontrado mientras se buscaba petróleo. Sin embargo, la zona geológica promete la existencia de yacimientos de gas. De ser así, las reservas en este país podrían aumentar en las próximas décadas. Lo mismo podría ocurrir, guardadas las proporciones, en otros países.

de la década de los ochenta. En 2004, Argentina explotó el equivalente a 46% de la producción de gas de Sudamérica.

El consumo en Sudamérica alcanzó los 104 g.m³ en 2004 y la demanda fue cubierta con la oferta local. Los mayores consumidores fueron Argentina, Venezuela y Brasil, que alcanzaron respectivamente 38%, 25% y 19% del consumo total. En comparación con el consumo mundial, Sudamérica, con su 10%, está muy por debajo del promedio de consumo de gas como fuente de energía primaria, que es de 24%.

De manera similar, en carbón se pueden distinguir varias zonas: de un lado están los países exportadores (Colombia y Venezuela) que también tienen una parte importante de las reservas del mineral y un alto nivel de consumo. En otros países con alto consumo y producción, las necesidades del desarrollo generan altas importaciones, como en el caso de Argentina Brasil, Chile y Perú. Aunque Ecuador tiene una cantidad significativa de reservas, ni el consumo, ni las exportaciones son significativas. Finalmente están los países pequeños, como los centroamericanos, que importan cantidades pequeñas del mineral. Hacia el futuro no se esperan cambios considerables si se toma en cuenta que la mayoría de las reservas se encuentran en Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina Chile y Perú.

La revisión de las reservas y los flujos comerciales actuales de energéticos permite identificar algunos factores estructurales a tomar en cuenta en el análisis geoestratégico. La relación entre ingreso per cápita y disponibilidad de recursos, de un lado, y el consumo de energéticos de otro, permite identificar cuatro tipos de países en una primera clasificación regional.

1. Aquellos países con mayor grado de crecimiento y que a pesar de disponer de recursos tienen una necesidad aún mayor de importar energéticos. En el ámbito global este es claramente el caso de Estados Unidos, pero en América Latina se pueden incluir también Brasil, Chile, México y, en menor grado, Argentina⁴.
2. Países con abundancia de energéticos y menor crecimiento que, por lo tanto, son o pueden ser importantes exportadores. Esta tendencia puede detenerse o cambiar si estos países se desarrollan rápidamente. En este grupo se encuentran Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú; casualmente, este grupo coincide con los países del área andina.
3. Países pequeños que no tienen suficientes recursos energéticos y deben importarlos. Por su tamaño, estos países no tienen mucho poder sobre el mercado internacional. En este caso se encuentran los países centroamericanos y del Caribe, además de Uruguay.
4. Países pequeños con buena dotación de algún recurso, como sucede con Trinidad y Tobago, Barbados y Paraguay.

La región es exportadora neta de energéticos. No obstante, las necesidades del desarrollo hacen que la disponibilidad de energéticos sea un problema a futuro para todos los países, incluso –aunque la producción actual puede ocultarlo– en el caso de Venezuela o Colombia. Si los países crecen, su consumo energético va a aumentar todavía más, de ahí que el suministro de energéticos sea un punto

4. El caso de Argentina merece un análisis más detenido: en Latinoamérica y el Caribe, según OLADE, Argentina participa con 8,1% de las reservas de gas natural y 2,1% de las de petróleo, mientras que en lo que hace a la producción, representa el 22,8% del total del producido de gas natural en la región y 8,0% de la de petróleo. Estas relaciones traducen el hecho de que en la Argentina se ha dado prioridad a la extracción en detrimento de la exploración. En estas condiciones, el país podría pasar a importador neto si aumenta sus tasas de crecimiento de manera significativa y persistente.

crucial en la seguridad energética de América Latina y que sea necesaria una política de integración para permitir el desarrollo de la región. De manera análoga, en Estados Unidos, la seguridad energética para permitir el crecimiento norteamericano supone la explotación preferente de los recursos energéticos latinoamericanos. Es la necesidad de garantizar abastecimiento en un contexto de creciente escasez lo que explica la tendencia reciente a la integración.

Integración en electricidad

Los tres principales procesos de integración eléctrica en América Latina son el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central-SIEPAC en Centroamérica, la Comunidad Andina de Naciones-CAN (Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú⁵) y Mercosur (Argentina, Uruguay y Brasil). También existen algunos procesos menos complejos entre Chile y Perú, Chile y Argentina y entre Bolivia y Brasil (Dyner et al., 2005).

En 2002 entró en operación el SIEPAC, que cuenta con un marco regulatorio regional ya establecido. Se trata de un mercado eléctrico mayorista, donde los agentes calificados compran y venden energía sin importar su ubicación y con acceso a la transmisión eléctrica de toda la región. El Mercado Eléctrico Regional entró en vigencia en 1999 con un tratado que brindaba el marco jurídico del sistema. La regulación y la garantía de que se siguen los principios y reglamentos de este tratado están a cargo de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, mientras la operación del sistema y la administración del mercado están a cargo del Ente Operador Regional. La operación de la red es tarea de la Empresa Propietaria de la Red, creada en 1999 por las seis empresas públicas de cada país, a quienes se integró en 2001 la firma española Endesa.

El sistema cuenta con un sistema troncal de transmisión indivisible de 230 kV de 1.830 Km de longitud. Se trata de un mercado relativamente pequeño, de algo menos de 40 millones de habitantes, una demanda máxima de 4.543 MW y requerimientos de energía eléctrica por 24.900 Gigavatios hora (GWh). Se estima que la demanda máxima es de 6.400 MW y 34.800 GWh de energía para el año 2005.

En la formación del mercado participaron los gobiernos centroamericanos y el de España que de 1987 en adelante realizaron varias cumbres presidenciales y en 1995 acordaron con el BID una cooperación técnica para la factibilidad técnico-económica, los estudios sobre la empresa propietaria y el Tratado Marco. El proyecto se complementó en reuniones y memorandos posteriores en los que se buscó crear un mercado competitivo, sin impuestos al comercio internacional de energía entre los países miembros, con participación privada, y que no discriminara a ninguno de los participantes.

Otro proyecto clave de integración eléctrica es el de la CAN. Los países andinos se han visto enfrentados a racionamientos como consecuencia de sequías en sistemas con importantes componentes hidroeléctricos. A raíz de ello se buscó la interconexión con el fin de suplir las deficiencias coyunturales del sistema. Las transacciones se realizan normalmente entre Colombia y Ecuador, pero la CAN creó un marco para realizarlas en toda la sub-región.

5. Con Bolivia también se prevén futuras interconexiones eléctricas.

Un mercado de electricidad unificado en la región de la CAN, cuyo parque generador sería principalmente hidroeléctrico, contaría con 110 millones de personas aproximadamente, en un área aproximada de 4.700.000 Km². La actual infraestructura de interconexión posee una capacidad de 250 MW entre Colombia y Venezuela, de 260 MW entre Colombia y Ecuador (actualmente en proceso de ampliación) y de 125 MW entre Ecuador y Perú.

Lo fundamental del marco regulatorio se encuentra en la Decisión CAN 536 que constituye el “Marco General para la interconexión sub-regional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad” (de diciembre de 2002). Entre las reglas se encuentran: la no discriminación de precios entre mercados, ni entre agentes internos y externos en cada país; la separación entre el flujo físico y los contratos de compraventa internacional; condiciones competitivas, con precios y tarifas eficientes, evitando abusos de posición dominante y con libre contratación entre los agentes; transacciones internacionales de corto plazo valoradas según los precios de la electricidad en ambos extremos de los enlaces intracomunitarios; promoción de la inversión privada en el desarrollo de la infraestructura de transporte; la no asignación de las rentas de congestión a los propietarios del enlace internacional; ausencia de subsidios, aranceles y restricciones a las exportaciones e importaciones de electricidad.

A diferencia del SIEPAC, que ofrece las condiciones para un alto grado de integración, los intercambios existentes en la CAN son acuerdos específicos que aprovechan las diferencias en los costos marginales y en momentos de emergencia por escasez en un país y superávit en otro. Los intercambios comerciales de electricidad se realizan entre Colombia y Ecuador desde 2003 y son en su mayoría exportaciones de Colombia a Ecuador, mientras Venezuela y Perú están desarrollando los modelos y los reglamentos.

Venezuela tiene aprobada su ley de electricidad, pero no la ha reglamentado ni materializado y es dudoso que lo haga dada la orientación del actual gobierno y el hecho de que el marco para la integración se construyó después de la ola privatizadora en América Latina, lo que generó la sensación errónea en algunos ambientes de que la privatización del sector era un pre-requisito para la integración. En efecto, es posible que Venezuela se acople posteriormente a la interconexión andina sin tener que modificar en gran medida su normativa interna, ya que la característica más importante del modelo andino es que tiene un objetivo pequeño y alcanzable (intercambios coordinados) que requiere el mínimo de cambios al interior de cada país. De todos modos, está por verse la profundidad de las fisuras en la CAN causadas por los TLC bilaterales, la internacionalización del conflicto colombiano, el alejamiento de Venezuela y el acercamiento de Venezuela y Bolivia al Mercosur.

En la actualidad existen proyectos de interconexión entre Colombia y Panamá que servirían de bisagra entre los sistemas de Centro y Suramérica (Dyner et al., 2005), con lo cual se obtendría una mayor eficiencia operacional de los sistemas (CIER, 1997). Esta interconexión estimularía el cambio técnico y el uso de gas para generación, y aumentaría los incentivos para la construcción de gasoductos y una integración energética más amplia con México, Perú y Colombia (y tal vez Bolivia y Venezuela) como potenciales suministradores de gas natural a la región. Pero aún sería necesario fortalecer la infraestructura, incorporar a Bolivia en la Decisión CAN 536, desarrollar el esquema de las TIE en

Venezuela, solidificar los entes supranacionales de regulación y resolver diversos problemas de índole tributaria, comercial y jurídica.

Finalmente, lo que existe en Mercosur son contratos bilaterales heterogéneos entre agentes de distintos países. Este esquema ha presentado diversos problemas, en particular el incumplimiento de contratos, que aumentan el riesgo de los agentes.

Tanto en Brasil como Paraguay la generación de energía es fundamentalmente hidroeléctrica; en Bolivia, térmica; y en Argentina y Chile de las dos tecnologías, con la ventaja de incorporar plantas a gas de ciclo combinado. Estas diferencias en la modalidad y la regulación del sector se traducen a veces en diferenciales de precios de hasta 15 dólares por MW entre Brasil y Argentina, que da una idea de las posibles ganancias. Además, una resolución de la Secretaría de Energía Argentina permite la importación y exportación de energía y simplifica el elemento burocrático de las transacciones.

Los procesos de integración en el cono sur debieron enfrentarse a las dificultades causadas por un incómodo ajuste entre la planeación estatal existente y el nuevo esquema de comercio oligopólico. En primer lugar, los sistemas hidráulicos crean la necesidad de una regulación administrativa que afecta el desarrollo de mercados eléctricos especialmente en Brasil. En segundo lugar, el sistema de transmisión eléctrica tenía una participación de la planificación estatal (Paraguay, Brasil y en alguna medida Argentina y Perú), pero se dejó a cargo del sector privado la integración eléctrica creando asimetrías en el tratamiento donde la visión local influye introduciendo barreras que de hecho dificultan la ejecución de las interconexiones. En tercer lugar, el combustible de expansión para el sector era el gas pero éste presentaba un mercado en desarrollo y poco competitivo en relación con los sectores eléctricos. Finalmente, en países como Argentina, el sistema de transporte de gas tenía participación privada, sin ser un mercado competitivo, dado el monopolio y las políticas de desarrollo del país.

Dentro de los principales proyectos de interconexión se encuentran los planes entre Argentina y Brasil que aprovecharían la sobreoferta térmica argentina y los excedentes hidráulicos brasileños. El intercambio de electricidad entre Argentina y Brasil se hizo posible porque ya se habían dado pasos para crear condiciones de integración energética, si bien la capacidad de interconexión aún podría ampliarse.

La interconexión Argentina-Chile se basa en protocolos firmados en 1997 y 2000. La de Uruguay-Brasil parte de los acuerdos de 1993 y del interés en la zona de Rivera-Livramento, cuya interconexión entró en servicio a finales del año 2000. Adicionalmente se encuentran el proyecto Corpus Christi entre Argentina y Paraguay y el de Integración Eléctrica Regional entre Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, que vincularía la central hidroeléctrica de Itaipú con las centrales de Yacyretá y, en el futuro, la central hidroeléctrica de Corpus Christi.

Si se toma en cuenta el desarrollo futuro de los mercados de Brasil, Argentina y Uruguay durante la próxima década, la energía de Yacyretá y Corpus resulta tener más posibilidades de consumo en Brasil que en el mercado rioplatense. Ello impulsaría crucialmente la integración eléctrica de los países del Mercosur.

Integración gasífera

Uno de los proyectos más discutidos en este renglón es el Plan Puebla-Panamá que contemplaba la construcción de una serie de corredores logísticos de infraestructuras de transporte desde el sur de México hasta Panamá, dentro de los cuales estaba incluida la interconexión gasífera, pero también carreteras, fibra óptica y otros. Este plan ha despertado suspicacia en diversos sectores porque se ha visto como un intento del capital estadounidense por controlar los países de la cuenca del Pacífico, fortalecer la industria maquiladora de la región y garantizar acceso a la biodiversidad y los yacimientos de petróleo, gas y agua de la región (Tablada y Hernández, 2004, p. 76).

De otro lado, en el cono sur se ha venido creando lentamente un mercado de gas integrado que ya da cuenta de más del 15% de las ventas en la sub-región.

De 1996 a 2001 se construyeron siete gasoductos entre Argentina y Chile, y también los gasoductos Bolivia-Brasil y Argentina-Uruguay-Brasil. En la región hay muchas más tuberías transnacionales en fase de planificación o de construcción. Entre los planes más notables está el de un sistema de tuberías que conecte Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. El denominado Gasoducto del Sur sería financiado por el BID y conectaría los campos de Camisea en Perú con la red existente de tuberías Chile-Argentina y más adelante con Porto Alegre, Brasil. Esto incluiría la construcción o expansión de tuberías y de nueva infraestructura de gas en Perú y Brasil. El sistema entraría en servicio en 2007 con una capacidad de 1.000 millones pcd. La inclusión de Bolivia en el proyecto se dificulta por el conflicto no resuelto con Chile sobre la salida al mar, que es crucial para el proyecto boliviano de exportación de gas natural licuado (GNL).

Bolivia también discutió la posibilidad de construir una nueva tubería transfronteriza que ayudara a paliar la insuficiencia de suministro de gas en Argentina. El proyecto de 622 millas y valorado en US\$1.000 millones de dólares había de entrar en servicio a finales de 2006 con capacidad de transportar 700 millones pdc. Otro proyecto es el gasoducto Paraguay-Paraná de 527 kilómetros (327 en Paraguay y 190 en Bolivia) a un costo global de unos US\$460 millones de dólares, y cuya construcción llevaría al menos tres años. Bolivia dispondría de una zona franca a orillas del río Paraguay para instalar una industria destinada a convertir el hidrocarburo en gas de consumo doméstico e industrial, en diesel o en fertilizantes químicos, que así mismo podría enviar gas comprimido a Uruguay a través de la hidrovía.

La factibilidad de otros gasoductos en la región se ve limitada por las distancias, la accidentada topografía y la escasez de mercados locales. Sin embargo, los grandes volúmenes de gas sin salida ponen a la región en un renglón ideal para el comercio del gas natural licuado (GNL). Los planes de exportación en Trinidad y Tobago (expansión a un quinto tren de GNL), Venezuela, Perú y Bolivia van a buen ritmo. México está avanzando en las obras de cuatro plantas de importación de GNL. Brasil podría algún día importar GNL de Trinidad y Tobago o Venezuela con la posibilidad de tener un terminal de regasificación en la costa. En Chile se licitó para suministrar GNL a un terminal de regasificación propuesto para el puerto de Quintero en el centro de Chile con una capacidad de 350 millones pcd. El estreno está previsto para 2008-2009.

En la 1ª Reunión del Consejo de Ministros de Energía, Electricidad, Hidrocarburos y Minas de la Comunidad Andina celebrada en Quito en enero de 2004, se fijaron las bases de la Alianza Energética Andina (AEA), la cual ha quedado proyectada en cinco ejes temáticos: construcción de redes físicas y marcos regulatorios armonizados; inserción en los mercados internacionales de hidrocarburos; promoción del desarrollo empresarial andino en “clusters energéticos”; marco de negociación y clasificación de los servicios de energía en la OMC y otras instancias internacionales; y desarrollo de la temática ambiental y social.

El Plan de Acción del Consejo otorgó prioridad al gas y creó un grupo *ad hoc* que ha venido trabajando en conjunto con entes internacionales como OLADE, CEPAL, BID y CAF. El plan de trabajo acordado enfatiza el fortalecimiento de los criterios sociales y el acceso de los pobres a las energías más limpias y eficientes como el gas y la electricidad en un marco de desarrollo sustentable.

En la misma reunión se acordó constituir el Grupo Permanente de Expertos Nacionales en Gas que estaría encargado de realizar estudios de demanda potencial a 2030, analizar posibles interconexiones con sus costos y fechas de entrada, auditar las reservas en cada país para evaluar los costos y beneficios de las nuevas reservas requeridas vis à vis las ventajas de la integración, delinear y avanzar (con apoyo de las empresas estatales) en los mecanismos de financiamiento, y políticas de precios para asegurar las inversiones usando racionalmente la renta petrolera, establecer los mecanismos y atribuciones del futuro ente regulador supranacional, y por último analizar las metodologías de tarifas, reglas de acceso, seguridad de suministro, competencia, protección de inversiones y usuarios para avanzar hacia marcos regulatorios comunes.

El proyecto gasífero más ambicioso en América Latina es la construcción de un gasoducto de unos 8.000 kilómetros desde el Orinoco hasta Buenos Aires a un costo cercano a los US\$20.000 millones de dólares que abastecería el creciente mercado del cono sur, que para 2030 se habrá triplicado (el mercado mundial se habrá duplicado para la misma fecha); 100 millones de metros cúbicos de gas natural de los 335 consumidos en 2030 provendrían de Venezuela. Los principales interrogantes son la factibilidad –¿es mejor el gasoducto o el transporte marítimo de gas licuado? ¿son suficientes las reservas venezolanas?– y el impacto ambiental de atravesar entre 2.000 y 3.000 kilómetros de la mayor reserva forestal del mundo: la selva Amazónica. Si bien la rentabilidad no es clara actualmente, ella no es necesariamente la mejor guía para la decisión puesto que la construcción misma del proyecto puede contribuir a la generación de nuevas oportunidades. En esta etapa la propuesta es esencialmente política.

Otro proyecto discutido por los presidentes de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela ha sido la incorporación de otra tubería para abastecer a Paraguay y Uruguay desde los yacimientos bolivianos de gas. Uruguay y Paraguay importan ese combustible de Argentina y Brasil y desde hace varios años se han mostrado interesados en el gas boliviano.

Puesto que el cono sur constituye la zona más poblada de Suramérica, es claro que la demanda potencial existe, si bien hace falta la creación de una industria basada en este combustible, tal como ocurre en Europa, que se abastece a través de un anillo de gasoductos que provienen de Rusia y de Argelia, a través del estrecho de Gibraltar. Las mejores perspectivas inmediatas para los mercados del

gas en Latinoamérica y el Caribe siguen siendo la generación de electricidad, la expansión del consumo industrial y el desarrollo de exportaciones de GNL.

El rápido aumento de los precios del petróleo sólo subraya la urgencia con que los países muy dependientes de la importación de petróleo, como Chile, están considerando la sustitución por gas en su sector industrial. Por otro lado, países exportadores de petróleo como Ecuador, Colombia y Venezuela están tratando de usar gas en sus sectores industriales para exportar más petróleo.

Todos los países de la región están considerando el uso de gas por razones ecológicas, puesto que produce menos contaminantes atmosféricos que el petróleo y no causa grandes desplazamientos de ecosistemas como los recursos hidráulicos.

En conclusión, existe un gran potencial de crecimiento del sector del gas en Latinoamérica y el Caribe cuya explotación requerirá de recursos importantes que pueden venir de un uso efectivo de la renta petrolera de los países productores complementados, probablemente, con capital privado. Este será el reto más importante en el futuro inmediato. En este sentido, el papel de los gobiernos tenderá al diseño y la institución de normas y reglamentos transparentes y coherentes para el sector del gas –en especial en cuanto a su aplicación en proyectos industriales y eléctricos– que sigan atrayendo a inversionistas privados. También será esencial que desarrollen mecanismos de precios, regalías e impuestos que permitan buenos ingresos sobre la inversión.

Así, dadas las actuales tasas de crecimiento, los países andinos serán la principal región exportadora y el cono sur la importadora, con una infraestructura de intercambio más amplia. Claro está que el panorama de infraestructura e intercambios también debe tomar en cuenta las variables políticas. Para ello es importante distinguir entre los intereses de los Estados y los intereses de los sectores de la sociedad, en algunos casos representados por los movimientos sociales.

La energía y los movimientos sociales en América Latina

La dependencia de los hidrocarburos hace que para los países desarrollados el garantizar el suministro a unos precios estables no sea visto como un problema meramente económico sino político y, en el caso de Estados Unidos, como un problema de seguridad.

De una época en la que el poder estaba en manos de los países consumidores y sus multinacionales, se pasó en la década de los setenta a otra con mayor poder de los Estados productores que empezaron a captar mayores rentas petroleras (Westphal, 2006). Los instrumentos para captar estas rentas fueron regalías, nuevos tipos de contratos, la nacionalización del petróleo y la creación de compañías estatales de petróleo. Luego, en los noventa, se pasa por una etapa de privatización de empresas y de construcción de interconexiones físicas y fomento del papel del mercado que condujo a la privatización total o parcial de empresas petroleras en Bolivia, Argentina y Brasil; en Colombia se permitió la competencia de las multinacionales en igualdad de condiciones con la estatal, reguladas por la nueva Agencia Nacional de Hidrocarburos (que copia la experiencia brasileña); las excepciones han sido México, donde se han privatizado procesos pero no la industria, y Venezuela, donde El estado recuperó el control de PDVSA, después de que la petrolera estatal desarrollara por un buen tiempo una agenda económica y política propia.

La tendencia pro mercado de los noventa restaba peso al papel de los Estados productores, disminuía su participación en la renta petrolera y coincidió con un período transitorio de bajos precios. De todos modos hay que recordar que la tendencia de largo plazo está a favor de los países productores y por lo tanto hacia una mayor participación de éstos en la renta petrolera. No sorprenden entonces las acciones que han tomado recientemente algunos países, como en el caso de la nacionalización en Bolivia. Más allá del movimiento reciente hacia la izquierda de los países latinoamericanos (que puede o no ser una tendencia transitoria), es de esperar que los futuros gobiernos de los países productores de la región introduzcan medidas para aumentar la renta. Estas medidas pueden ser nacionalizaciones como en Bolivia y tal vez en Argentina o Perú, pero también pueden ser cambios en los contratos, impuestos, regalías y en la estructura de competencia en la industria.

Los flujos comerciales en el mundo están en la actualidad bastante limitados. La mayor parte de las exportaciones de Venezuela, por ejemplo, se dirigen a Estados Unidos, y las de Rusia a la Unión Europea. Por esta razón, una estrategia de los países productores es la diversificación de sus compradores. Así se explican los deseos de Venezuela de construir un oleoducto al Pacífico vía Colombia con el fin de exportar a China y el lejano oriente, así como la propuesta del gasoducto hasta Argentina y Brasil. La construcción del gasoducto al cono sur, aunque no sea inicialmente rentable (pero podría serlo a medida que suban los precios) hace que a mediano plazo sea más difícil establecer interconexiones alternativas.

Lo anterior apunta a reducir la dependencia de los exportadores respecto de Estados Unidos pero la integración latinoamericana despierta nuevas contradicciones que ya se dejan ver con la nacionalización en Bolivia. En efecto, al ganar poder los países productores, el efecto inmediato es el aumento en los precios. Pero en un esquema de integración regional los vecinos son los directamente afectados. Un aumento de los precios del gas boliviano o argentino sería pagado por los consumidores del sur brasileño: es difícil que un país con los grados de pobreza de Bolivia esté dispuesto a subsidiarlo, especialmente con una tendencia creciente de los precios a largo plazo.

La integración, entonces, reforzará conflictos latentes entre los exportadores e importadores locales, a no ser que se encuentren fórmulas novedosas de cooperación que sean claramente favorables al desarrollo de países como Bolivia y Ecuador. Pero incluso si tales fórmulas funcionaran, el desarrollo de los países pobres de la zona aumentará aún más la demanda por energéticos. Por eso la solución debe apuntar en todo caso a cambiar la matriz de uso de energía hacia las alternativas.

Finalmente, un punto clave lo constituyen los países de América Central, cuya dependencia de las importaciones de hidrocarburos puede tender a reforzar sus vínculos con Estados Unidos en contra de los países exportadores. La importancia de la integración eléctrica entre CAN y SIEPAC radica también en la posibilidad de disminución de esta tensión.

Antecedentes históricos

En la discusión anterior se ha privilegiado el papel de los Estados pero no se ha discutido el papel de los movimientos sociales latinoamericanos que, en una larga historia ligada a la lucha por la tierra, el derecho al sufragio y otras demandas colectivas ante la vulnerabilidad o ilegitimidad de

los sistemas políticos, han ido dando mayor importancia en algunos casos a cuestiones energéticas y ambientales (Foweraker, 1995).

Alrededor del tema energético algunos de los movimientos sociales presentes en América Latina han reivindicado la importancia y la necesidad de control estatal de los energéticos. Las peticiones presentan algunas variaciones según el país y el tipo de movimiento social.

Los movimientos sociales anteriores a los años sesenta fueron limitados y con protagonismo de actores de clase como los movimientos laborales y agrarios, si bien la movilización de masas en Latinoamérica fue fundada durante los regímenes populistas desde los años treinta (Vargas Hernández, 2006). En los sesenta surgieron movimientos urbanos mayoritariamente femeninos alrededor de la demanda por servicios públicos y acceso a la tierra y el agua. En los setenta la teología de la liberación fue responsable de movimientos sociales que trabajaron para liberar a los pobres y oprimidos; posteriormente emergieron movimientos indígenas, los movimientos de base, Organizaciones No Gubernamentales y organizaciones en relaciones con la izquierda, los cuales lucharon contra regímenes autoritarios. Junto con las mujeres, maestros, estudiantes, grupos étnicos y movimientos ambientales aparecieron los movimientos laborales y de campesinos.

Después de 1980, los movimientos de campesinos indígenas activamente participaron en los procesos de democratización de Latinoamérica. Los movimientos populares de Latinoamérica y el mundo desarrollado son definidos por la inclusión popular de sectores dentro de la sociedad civil y su habilidad para retar al Estado, tal como el caso de los movimientos indígenas.

En los años ochenta y noventa los movimientos sociales consideraron los aspectos materiales o económicos y el establecimiento de derechos universales propios de una democracia completa; su objetivo primordial fue el establecimiento de sistemas y estructuras democráticas hasta el punto en que, con el retorno de la democracia en la mayor parte de Suramérica en los ochenta, la actividad de los movimientos sociales se redujo considerablemente.

Los nuevos movimientos sociales en Latinoamérica buscan crear nuevos espacios políticos –como ocurre con los movimientos de mujeres, de paz, ecológicos, de vecinos, de autoayuda– contra el neoliberalismo y la globalización. En los últimos se encuentran, junto con la preocupación por el libre comercio, el rechazo a la inversión extranjera en la energía.

El impacto del libre comercio y la integración económica ha provocado que en las comunidades de distintos países latinoamericanos se aliente el avance de los movimientos sociales para la participación en temas cruciales tales como el acceso a la información, trabajo digno, estándares ambientales, derechos de los latinos inmigrantes, de pequeños propietarios campesinos, movimientos pro democracia y de derechos humanos. Algunos movimientos dedicados a los temas medio ambientales –que llegan a ser considerables en Latinoamérica– reaccionan ante los daños a la capa de ozono, el efecto de invernadero, las pruebas atómicas o la contaminación reafirmando la necesidad de buscar soluciones alternativas a estos problemas.

Los movimientos ciudadanos son nuevas formas de acción colectiva y emergen en los espacios de la nueva sociedad civil en América Latina. Son nuevas formas de expresión de las identidades colectivas y marcan un nuevo desarrollo de protesta que confía más en las redes internacionales.

Después de esta breve cronología sobre los movimientos sociales en Latinoamérica se puede observar que la relación entre los movimientos sociales y la energía surge desde los años sesenta con los movimientos urbanos y sus demandas por servicios públicos y acceso a la tierra y el agua. En las últimas décadas esta relación es más profunda ya que los movimientos sociales se enfocan no sólo en la reivindicación de un derecho, como el acceso a un servicio público, sino que también empiezan a cuestionar la forma del funcionamiento de los mercados de energía, el impacto del libre comercio en esta área y especialmente las inversiones extranjeras en los países latinoamericanos, concretamente de las multinacionales energéticas. Esta situación ha generado propuestas hacia una posible integración de países latinoamericanos alrededor de este tema energético (Vargas Hernández, 2006).

Las reivindicaciones de los movimientos sociales sobre el sector energético son más fuertes en algunos países de la región que en Centroamérica. Pero no hay que subestimar el impacto de estos movimientos en países con un potencial exportador como el estudiado en la sección anterior.

A continuación se presentará una breve descripción de las reivindicaciones de los movimientos sociales en el tema energético en los países clave.

Bolivia

Los movimientos sociales en Bolivia han estado entre los más relacionados con el tema energético en América Latina y se encuentran básicamente constituidos por organizaciones campesinas, cocaleros, indígenas, sin tierra, colonizadores, mujeres del agro y otras del movimiento social (Bolpress, 2005). Las reivindicaciones de estos alrededor del manejo de los recursos energéticos se ha dado a través de manifestaciones como el levantamiento popular de octubre de 2003 donde pidieron que se realizara un referéndum sobre políticas energéticas, recuperación social de los hidrocarburos, nacionalización del petróleo y del gas, ya que existe una situación de inaccesibilidad al gas y combustibles para el pueblo boliviano. Estas movilizaciones condujeron a que siete meses más tarde se concluyera con una propuesta de una nueva legislación sobre hidrocarburos y la convocatoria al referéndum de julio de 2004 (Algranati, Seoane y Taddei, 2004).

Estas protestas continuaron en mayo de 2005 y se creó el "Pacto de Unidad" de los diferentes movimientos sociales, campesinos, indígenas, etc. (Bolpress, 2005), que se movilizaron desde diferentes partes del país hacia La Paz bloqueando carreteras y calles y desabasteciendo de productos a las ciudades con el fin de ejercer presión sobre el Congreso para que éste aprobara la nacionalización de los hidrocarburos. En diciembre de 2005 la Central Obrera Boliviana, la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia y la Central Obrera Regional de El Alto realizaron la Cumbre Nacional Obrera en la cual se debatió la estrategia para la nacionalización de los hidrocarburos y los recursos naturales (Indymedia, 2005).

Esta disputa social por la propiedad y distribución de los beneficios obtenidos de la explotación de la riqueza hidrocarburífera (la "guerra del gas") ha pasado del terreno de lo social y reivindicativo para involucrar lo político. Es así como el líder del movimiento campesino y cocalero Evo Morales triunfó en las elecciones presidenciales y es el actual jefe de Estado.

Dos políticas son actualmente la prioridad para el Presidente: la primera es la convocatoria a una asamblea nacional constituyente donde se elegirán tres constituyentes por cada una de las 70 circunscripciones del país (Zibechi, 2006), con el objetivo de buscar la democratización del Estado y una mayor participación de indígenas en los cargos políticos; y la segunda es la nacionalización de los hidrocarburos, ejecutada recientemente. Estas dos políticas son la síntesis de las exigencias de los movimientos sociales del país.

Ecuador

En el caso de Ecuador, las organizaciones sociales e indígenas han venido desarrollando una lucha intensa logrando influir de manera directa en los procesos de decisión política y económica del país sobre la base del respeto a la soberanía nacional, a la Constitución y a las leyes ecuatorianas. El país parece vivir un momento histórico en el que se ha logrado fortalecer la expresión de una base social y alcanzar un potencial de movilización con matices políticos. En otras palabras, su presencia activa ha generado impactos en los sistemas de acción política, social y económica. Precisamente, uno de los impactos recientes más significativos lo constituyó la declaración de la caducidad del contrato con la compañía estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) que trajo como una de las consecuencias el cierre unilateral por parte de Estados Unidos de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Ecuador.

El cese del convenio con la transnacional tuvo como trasfondo la presión de los movimientos sociales, indígenas y de izquierda. Así, el rechazo a los proyectos hegemónicos ha dinamizado la consolidación de la influencia de estos actores en el país, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que para el pueblo ecuatoriano tienen los recursos naturales, y específicamente el petróleo, que –al igual que en Colombia y en Venezuela– es el principal producto de exportación.

De acuerdo con De la Torre (2001) los Movimientos Sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE han incorporado demandas nacionales que trascienden sus intereses corporativos étnicos, como es el caso de los planteamientos que cuestionan las políticas de ajuste estructural, de eliminación de subsidios a la luz eléctrica o del gas para uso doméstico y, recientemente, la adopción del dólar como nueva moneda nacional. Las demandas indígenas han sido exitosas al cambiar la imagen de la identidad nacional de mestiza a plurinacional; al cuestionar las percepciones racistas de pasividad y falta de inteligencia de los indígenas, algunos de los cuales ocupan en la actualidad altos cargos políticos y públicos; y al incorporar al Estado a una parte de la intelectualidad indígena, como representante de su grupo. De igual manera, el movimiento La Comuna también ha venido consolidando su papel e influencia insistiendo en la necesidad de formar alianzas entre las demás organizaciones sociales, los partidos y movimientos políticos.

Venezuela

La inestabilidad política ha generado una profunda polarización de la sociedad en el país que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del continente. Aquí se han ido configurando movimientos de resistencia frente al modelo neoliberal y movimientos de oposición a las políticas ins-

trumentadas por el propio gobierno. Esta dinámica ha generado una situación de tensión permanente y de fragmentación en las formas de expresión colectiva.

Las diferencias de clase se han traducido en diferencias políticas, los conflictos políticos han derivado en sociopolíticos en la medida en que se han impregnado con contenidos de clase y la polarización sociopolítica se ha expresado en conflictos de carácter territorial (García Guadilla, 2003).

En la actual situación, que se inscribe en lo que se ha catalogado como el “fenómeno chavista”, se cuestionan las perspectivas de integración energética con los demás países de la región. En especial si se tiene en cuenta la formalización de la salida de Venezuela de la CAN y las nuevas condiciones impuestas por este país para adelantar cualquier proceso de integración. Si bien es cierta la notable importancia de consolidar este proceso de integración en el sector energético, el ambiente de incertidumbre en la región frente a la respuesta del gobierno a cuya cabeza está Hugo Chávez genera un cierto aislamiento en términos sociales y políticos.

Aunque el gobierno venezolano reconoce la importancia del proceso de integración, también recalca la necesidad de modificar la estrategia basada en el modelo “neoliberal”. Así, durante la Primera Reunión de presidentes y de jefes de Estado de los países que conforman la Comunidad Sudamericana de Naciones celebrada en Brasilia en el año 2005, el presidente Chávez propuso la creación de una Comisión Sur a fin de estudiar un Plan estratégico 2005-2010 para la integración. De igual manera vale la pena destacar la propuesta que ha realizado el gobierno de impulsar la iniciativa de integración energética a través de PetroAmérica –conformada por PetroCaribe, PetroAndina y PetroSur⁶– que se ha enmarcado en la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y está orientada a establecer mecanismos de cooperación e integración utilizando los recursos de Centroamérica, Suramérica y las regiones del Caribe.

En términos generales es posible observar una debilidad organizativa en lo social y en lo político. No obstante, como hecho relevante en relación con las movilizaciones, vale la pena destacar el paro petrolero llevado a cabo entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 por sectores de la oposición como estrategia económica para doblegar al gobierno. Este paro, si bien no logró el objetivo político de derrocar al gobierno de Hugo Chávez, generó graves daños en la economía debido a la disminución de la actividad productiva y a los costos económicos tras el bloqueo del transporte de crudo dentro y fuera del país, así como la suspensión de las exportaciones de hidrocarburos por tres meses.

El fin del paro marcó un cambio en el proceso político venezolano: reforzó el apoyo popular al gobierno que, con una Fuerza Armada pronta a defender el orden constitucional “y gracias a las posibilidades que las reservas internacionales brindan para realizar importaciones de emergencia, no sólo derrota al paro sino que, después de largos meses a la defensiva en que consume una alta proporción de sus energías en resistir los ataques de la oposición, recupera la iniciativa política” (Lander, 2004).

Argentina

Según Corredera y Rosenfeld (2004), Argentina en la actualidad se encuentra en una crisis energética generalizada dada la politización de los sistemas energéticos y el continuo aumento del con-

6. En PetroSur se agrupan países como Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay; PetroCaribe está formada por 14 países de la región caribeña; y PetroAndina esta conformada por Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela.

sumo en un contexto de ineficiencia energética y desigualdad social. Como consecuencia, luego de haber exportado petróleo, gas y electricidad, ahora Argentina debe importarlos desde Bolivia y Brasil.

En este escenario, una de las principales preocupaciones tiene que ver con la capacidad de abastecimiento del país en el mediano y en el largo plazo, ya que atraviesa el mayor período de caída de la producción de toda su historia petrolera. Por si fuera poco, no se han descubierto yacimientos en los últimos años (el 88% de la energía primaria consumida está constituido por petróleo y gas natural) (Lapeña, 2005). Según este autor, la caída en las reservas fue resultado de la privatización de YPF, que se realizó sin la cobertura de una estrategia energética nacional y con un Estado que fue delegando su papel para no entorpecer el mecanismo de mercado.

A diferencia de países como Bolivia y Ecuador, donde los movimientos sociales tienen una posición clara frente al tema energético, la mayoría de las formas de acción colectiva han centrado su interés en diversas temáticas de carácter social. Los nuevos movimientos intentan reconstruir los lazos sociales a través de nuevas formas de organización. Organizaciones de desocupados, empresas recuperadas y asambleas barriales constituyen respuestas novedosas a la crisis del modelo neoliberal en Argentina al formular proyectos que cambian radicalmente las relaciones sociales sustituyendo las reglas básicas del sistema económico y social por otras que plantean acceso universal a los medios de subsistencia y acceso colectivo a los medios de producción, además de introducir nuevas prácticas sociales de deliberación (Palomino et al., 2004).

Brasil

Al igual que Argentina, Brasil ha sufrido importantes cambios en el mercado energético, especialmente en el tema de la regulación. En el sector eléctrico, por ejemplo, desde la década de los noventa se inició una reestructuración que se formalizó en la modificación de las normas para la licitación y los contratos de la administración pública, así como del régimen de concesiones y permisos de prestaciones de servicios públicos.

Brasil ha logrado alcanzar un nivel de autosuficiencia en la mayoría de sus fuentes energéticas y posee un enorme potencial hidroeléctrico a pesar de ser un importador neto de petróleo. Aunque en la actualidad existe preocupación creciente por el futuro de las importaciones de gas natural que realiza el país tras la nacionalización de los hidrocarburos decretada por el gobierno boliviano, la empresa estatal Petrobrás decidió impulsar y acelerar sus planes de explotación de reservas nacionales. De esta manera, Brasil resulta ser un país estratégico pues compra gas natural a países como Argentina y Bolivia y electricidad a Venezuela.

Bajo esta perspectiva, un análisis de los movimientos sociales en Brasil conduce a identificar como punto de referencia el Movimiento de los Trabajadores rurales Sin Tierra (MST), que ha sido catalogado como un movimiento de carácter rural con una de las más importantes dinámicas de participación. En este sentido, su elaboración del tema energético es escasa y se dirige más bien a temas de carácter social y de tenencia de tierras. Según Zibechi (2005) los Sin Tierra son un poderoso movimiento social-político que actúa de manera autónoma con respecto a los partidos políticos, aunque mantiene fluidas relaciones con el Estado que, en ciertos casos, financia iniciativas del movimiento:

los Sin Tierra defienden una reforma agraria novedosa, que incluye la “democratización del capital”, la creación de cooperativas agroindustriales y la democratización de la educación.

El MST sostiene que la victoria electoral de Lula cambió la correlación de fuerzas en el país sin derrotar estratégicamente al modelo neoliberal y que hasta ahora no ha sido posible encarar reformas estructurales porque el movimiento social atraviesa un largo período de descenso. Por eso, la prioridad del MST está en la organización y la movilización: la agrupación ha sido uno de los principales animadores de la puesta en pie de un frente de todos los movimientos sociales de Brasil: la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS).

Cuanto más progresistas son los gobiernos, más posibilidades se abren a los movimientos, a la vez que surgen nuevas dificultades para las que a menudo no están preparados, como la cooptación de algunos sectores por los nuevos gobiernos en Argentina, Bolivia y Ecuador. En Brasil, los Sin Tierra parecen estar eludiendo ambos peligros. En todo caso, en ninguno de estos países se ha frenado la movilización y el fortalecimiento de los movimientos.

Cabe mencionar, finalmente, que la nacionalización boliviana desata un problema sobre la plataforma social del gobierno de Lula, pues el aumento del precio del gas se reflejaría en las tarifas de servicios públicos. No obstante, es necesario entender que el aumento en el precio del gas será una tendencia permanente en las próximas décadas.

Perú

La política energética del ex presidente Fujimori favoreció a las empresas privadas con contratos-ley de estabilización tributaria y la ley de regalías que estableció que éstas sólo serían pagadas por las empresas que no tenían contrato-ley y sólo a partir del inicio de la venta se pagaría entre 1% y 3% de las ventas de su producción. También estableció el canon minero de 50% del impuesto a la renta que deben pagar al Estado las empresas que lo explotan pero que, según los movimientos sociales, no está bien distribuido ya que no llega hasta las comunidades, las cuales sólo reciben los problemas ambientales y sociales. A raíz de esta política los movimientos sociales en Perú empiezan a reivindicar la necesidad de crear una nueva política desde los pueblos y las comunidades (Centro de Estudios Internacionales, 2005).

Los movimientos sociales de los pueblos indígenas del Perú, a pesar de tener una larga tradición de resistencia y revuelta (recuérdese a Túpac Amaru), presentan serias dificultades para consolidarse. Las 42 etnias tienen serias divisiones y una disputa de legitimidad y representatividad. Si bien han reivindicado la necesidad del control de los recursos naturales y el derecho a los servicios energéticos, las divisiones internas debilitan sus exigencias frente al Estado (Zibechi, 2005) y tienen un carácter coyuntural, como ocurrió en mayo de 2006 cuando se paralizaron las actividades del pueblo de Huayto por la protesta general de los pobladores que salieron por las calles para denunciar que una empresa agroindustrial de la región los dejó sin energía eléctrica y agua durante más de una semana (Quiroz, 2006).

Colombia

La reivindicación de los movimientos sociales en Colombia frente a los recursos energéticos ha estado concentrada en dos puntos: el primero de ellos está relacionado con grupos de trabajadores de las empresas de energía eléctrica que protestan por la privatización de las empresas del sector y las ventas de estas empresas a compañías multinacionales ya que, si este proceso continúa, afirman que no es posible garantizar la prestación del servicio público a los estratos más pobres de la población y un funcionamiento ambiental adecuado (CENSAT, 2003). El otro punto de reivindicación por parte de algunos movimientos sociales en Colombia está relacionado con los sitios de explotación petrolera en algunas partes del país, como en el nororiente, que es un territorio en el cual se encuentra asentada la población indígena de los U'wa para quienes el petróleo simboliza la sangre de la tierra y es imposible dentro de su cosmovisión admitir que sea extraído, llegando a considerar la posibilidad de un suicidio colectivo en tal circunstancia (Pérez Gutiérrez, 2002). Por ello diferentes ONG y movimientos sociales han reclamado al Estado colombiano que se respete la cultura de estos pueblos milenarios y no se permita a ninguna compañía la extracción del hidrocarburo de la región.

Otros pueblos indígenas que se han visto afectados por la explotación de hidrocarburos y la construcción de megaproyectos han sido los Emberá katío del Alto Sinu (Baleata, 2006) y los Wayú en la Guajira, donde se encuentran minas de carbón (Gómez, 2005). Otras regiones han tenido impactos medioambientales por la falta de regulación ambiental para la explotación de petróleo como es el caso de Mompox, donde la federación de pescadores ha realizado denuncias ante el Congreso de la República.

Además de estas reivindicaciones existen otras relacionadas con los recursos energéticos que han sido realizadas por los grupos guerrilleros que hacen parte del conflicto armado colombiano, especialmente el Ejército de Liberación Nacional-ELN, cuyos planteamientos se han enfocado en temas como la inversión, el papel de las multinacionales y la soberanía nacional, entre otros. En este sentido, este grupo ha manifestado que se debe limitar y controlar la explotación petrolera por parte de las compañías multinacionales del petróleo dándole prioridad a la política de explotación nacional de los recursos naturales.

México

Las reivindicaciones de los movimientos sociales se ven divididas en este país básicamente en dos grupos: movimientos urbanos que reivindican una disminución en las tarifas de energía eléctrica e IVA, y movimientos indígenas que piden respeto por los recursos propios de sus tierras.

Entre las reivindicaciones urbanas, algunas se relacionan con el servicio público energético y muchas son coyunturales como la de Tabasco en 2004, cuando se exigió al gobierno federal el mantenimiento del subsidio a la electricidad y el replanteamiento de las tarifas eléctricas residenciales en las regiones de los climas cálidos (De Buen, 2004).

Las exigencias de los movimientos indígenas se ven plasmadas en declaraciones como la de N'Donhuani de mayo de 2006, en la que reivindicaron su lucha contra los acaparadores de los recursos naturales y la privatización de tales recursos.

En el análisis de los diferentes países se identifican diferencias en los modos de acción y de organización colectiva. Es claro que existen conflictos estratégicos entre los actores colectivos en re-

presentación del aparato estatal, de los indígenas y campesinos, de los empresarios, etc. Sin embargo, recogiendo las diferentes propuestas de integración, resulta clara la importancia de abrir espacios de discusión, y en este sentido identificar cuál es el rol de los diferentes actores y propiciar la participación e incorporación de la sociedad civil en el proceso de integración.

Los casos con claras reivindicaciones en el tema energético por parte de los movimientos sociales son Ecuador y Bolivia. Aunque en sus versiones más extremas los movimientos buscan la nacionalización de los recursos energéticos y la expulsión de las multinacionales, el factor común en América Latina tiene que ver más bien con la recuperación del control de las rentas energéticas las tarifas y su dedicación a la solución de los problemas sociales y de los usuarios finales.

En general, se trata de pensar la integración energética como un objetivo político y económico reconociendo las estructuras económicas asimétricas y los objetivos y las prioridades de política energética. El reto ahora es encontrar puntos de confluencia entre los intereses de los Estados y los de los movimientos sociales en la integración energética, tema que se abordará a continuación.

Propuestas para el uso de la integración energética como motor de la integración política

Las demandas de los movimientos sociales, algunas de las cuales deberían estar satisfechas de haberse cumplido las promesas de las reformas liberalizantes de los años noventa, plantean la pregunta acerca de quiénes serían los beneficiarios de la futura integración energética.

Una primera alternativa es que el objetivo de la integración sea el mantenimiento de las tasas de crecimiento de las grandes consumidoras actuales, como Estados Unidos. Desde este punto de vista, una integración energética completa en Latinoamérica garantizaría a Estados Unidos acceso al petróleo de Venezuela y Ecuador, al gas de Perú y Bolivia y a la electricidad de los países andinos. A cambio, los países exportadores recibirían durante un tiempo una renta energética que les permitiría paliar problemas de desajuste fiscal o de balanza de pagos pero que no los prepararía para el salto a las energías alternas cuando se acabe el petróleo.

La segunda alternativa, una integración que busque mantener las tasas de crecimiento de los grandes consumidores latinoamericanos como Brasil, Chile, Argentina y México, no resulta mucho mejor que la anterior, ya que profundizaría las diferencias regionales. Desde el punto de vista del crecimiento económico, la integración energética sólo tiene sentido si beneficia a todos los países. En este sentido, iniciativas como la impulsada por Venezuela para vender gas subsidiado a los países de América Central no dejan de tener interés, si bien pueden crear mayor dependencia de los combustibles fósiles en un momento de transición.

La integración deseable sería una con énfasis en lo social, que permitiera financiar un desarrollo equilibrado entre países latinoamericanos y que usara los recursos energéticos como respaldo al crecimiento y como palanca para saltar al uso de energías renovables. Hay que notar que el deseable desarrollo de los países andinos, por ejemplo, disminuirá sus excedentes exportables. Se necesitará la creación de entes supranacionales que permitan coordinar los intereses entre países exportadores e

importadores, entre países más y menos desarrollados y que permitan fortalecer la posición conjunta de América Latina ante Estados Unidos.

El papel del gas

Las tendencias políticas han hecho que las compañías extranjeras tengan ahora mucho menos interés que en los años noventa en invertir en Latinoamérica y el Caribe, pero el sector ha cambiado definitivamente debido a las reformas que entonces se hicieron. Resulta notable la presencia de multinacionales que se han reestablecido en la región así como el nuevo carácter de algunas empresas locales, como Petrobrás y el sucesor de YPF, Repsol YPF S.A. También han aparecido muchas firmas operadoras independientes, domésticas y extranjeras, a lo largo de la cadena de valor del gas, con compañías de exploración y producción que han adquirido intereses en transporte, o empresas de tuberías que se han adentrado en el upstream.

Hay que notar también que, si bien el gas brinda seguridad en un sistema hidrotérmico, la generación no debería ser su objetivo principal por cuanto no es el uso más eficiente desde un punto de vista técnico. Se debe buscar entonces la masificación en usos residenciales como combustible y para gas vehicular. Aquí tiene un potencial importante pues puede compensar el alza en las tarifas residenciales de la electricidad.

Las compañías privadas tienen un claro interés en las reservas de gas latinoamericanas. Tal es el caso no sólo de las transnacionales tradicionales sino de las compañías privatizadas como Petrobrás o Repsol YPF. Si bien varias de las nuevas transnacionales del sector son mixtas, fuera de sus países de origen parecen operar con una lógica eminentemente privada. Tal situación podría cambiar y podrían obtenerse mayores beneficios sociales si se crease un marco de acción regional común.

En la búsqueda de un objetivo social es útil estudiar los puntos débiles de la integración económica orientada a la exportación hacia los grandes consumidores, en especial en los casos de Perú y Bolivia. A pesar de sus grandes posibilidades de producción de gas, la política boliviana se orientó en dirección a la exportación de gas natural licuado, sin antes diseñar un programa de masificación del gas; otro tanto ocurrió con el caso de Camisea en Perú, donde además la población es temerosa frente al gas natural, a pesar de que éste es mucho más seguro que el GLP. La masificación del gas permite reducir el costo de la energía para los hogares y compensar por esta vía los incrementos en las tarifas que enfrentaron los consumidores residenciales como resultado de los procesos de privatización del sector en los noventa. Que la masificación segura del gas es posible lo muestra el caso de Colombia. El otro frente clave de desarrollo es el gas natural vehicular, que ha tenido una fuerte expansión en Argentina, Brasil y más recientemente en Colombia y un tanto en los demás países andinos.

Un proceso de integración que contemple lo social debería buscar elevar el nivel de vida de los estratos más pobres mediante este tipo de medidas. Otro ejemplo de las posibilidades de una integración social se refiere al destino de las rentas de cogestión en los intercambios de electricidad, que en el marco andino se destinan en parte a las zonas no interconectadas.

¿Se necesitan mercados de electricidad para lograr la integración?

La interconexión eléctrica en el Mercosur avanzó en conjunto con las privatizaciones del sector y con la creciente demanda de algunos de los países participantes, como Argentina y Brasil. Sin embargo, tal como se enfatizó en la primera sección, el punto importante del esquema de la CAN es que no requiere de mayores cambios en el ordenamiento del sistema al interior de cada país y permite así que cada país decida de manera soberana si su sistema es público, de mercado o mixto, y en qué grado.

Si bien los esquemas de mercado han funcionado bien en algunos casos, es bueno ser prudente en cuanto a sus ventajas. La más documentada ha sido la baja en las tarifas industriales, dado que son estos consumidores los que tienen mejor poder de negociación. Al mismo tiempo se han venido eliminando subsidios a los consumidores, con el consiguiente malestar por las mayores tarifas a consumidores residenciales.

Esta redistribución de la renta hidroeléctrica puede tener efectos benéficos por varias vías que, no obstante no haber sido buscados conscientemente hasta ahora, podrían ser útiles en un nuevo tipo de integración. Las menores tarifas se podrían traducir en mayores ganancias para la industria, o en menores precios de los bienes intensivos en energía, que permitirían mayores exportaciones o mayor consumo interno. Si bien en esta dirección se podría diseñar una estrategia de desarrollo coherente, un ambiente de *laissez faire* no necesariamente la lograría, ya que se requiere controlar el poder de mercado de los diferentes grupos involucrados.

Una tendencia que parece ocurrir en el esquema de mercado pero que no ha sido identificada plenamente es la disminución de la inversión en generación, particularmente hidroeléctrica. Si esto se constatará constituiría una debilidad mayor del modelo, puesto que la inversión debería estar en manos públicas, contradiciendo el esquema de mercado y su supuesto de que el sector privado es mejor que el público a la hora de invertir.

Dado que aún no son claras las ventajas y desventajas de cada esquema conviene tener claro que no se pueden hacer recomendaciones uniformes acerca de la organización de estos sectores, máxime cuando los sistemas latinoamericanos tienen diferencias apreciables en su composición hidrotérmica.

El papel del petróleo

Acerca del petróleo ha circulado con insistencia la propuesta de una compañía o compañías supranacionales latinoamericanas, como la planteada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con PetroAmérica.

Esta idea, que también ha sido defendida por autores como Bernal (2005) para Mercosur, es sencilla: dada la importancia de los hidrocarburos como herramienta estratégica para el desarrollo, se buscaría vender el petróleo y sus derivados en el mercado interno al costo de producción y tratar a los hidrocarburos como bienes sociales más que comerciales. Se espera que si el valor social de los hidrocarburos reemplaza la ganancia comercial, los capitales privados no estarán interesados en la explotación de estos recursos, mucho menos los capitales extranjeros.

En un escenario en el que la inversión privada no estuviera interesada en pertenecer al negocio de la extracción de los hidrocarburos en Latinoamérica, el único ente capaz de correr con estas inver-

siones anteponiendo el bienestar social a la ganancia comercial sería el Estado; este aparato tendría como último propósito socializar el petróleo y volcarlo hacia el desarrollo del mercado interno y la industrialización nacional, buscando la producción de bienes de capital con alto valor agregado. De este modo se fortalecería la soberanía económica de los países latinoamericanos y se abrirían posibilidades para la salida del atraso.

Las propuestas que se orientan en este sentido señalan correctamente que la explotación y exportación de reservas latinoamericanas se realiza, en términos generales, sin considerar su importancia a largo plazo para el desarrollo. Adicionalmente, estas propuestas parten de la experiencia exitosa de empresas como PDVSA, Petrobrás y Pemex que logran competir de igual a igual con empresas europeas y norteamericanas, sin mayores diferencias tecnológicas.

No obstante, esto presenta varias dificultades. Una menor, de orden técnico, radica en la diversidad en las calidades de los crudos y los bajos niveles de infraestructura, con la consiguiente traba para plantear precios únicos. Un obstáculo más importante es que, si bien es cierto que es deseable volcar adentro la renta petrolera con un objetivo de desarrollo sostenible y tomando en cuenta la demanda interna de la región, no es claro que la formación de una empresa pueda ser viable en el corto o mediano plazo. Lo que sí es posible es la creación de entes supranacionales de coordinación que permitan aumentar la renta petrolera de forma conjunta pero respetando la autonomía de los diferentes países. No es claro, por ejemplo, que todos los productores de hidrocarburos encuentren conveniente seguir el ejemplo de Bolivia, ya que es posible que algunos logren los mismos resultados cambiando otras reglas de juego como la forma de contratación. Organismos supranacionales permitirían que estas políticas se realicen de forma concertada, de modo de minimizar sus efectos sobre los países vecinos y con unificación de algunas tarifas. Son precisamente estos entes supranacionales con objetivos pequeños y alcanzables a corto plazo los que apuntalarán la integración a largo plazo.

Lo que sí es dudoso es que la región pueda decidir no exportar hidrocarburos para tener reservas a cien años, como a veces se ha planteado. De un lado porque el desarrollo latinoamericano enfrenta restricciones de divisas que, en varios países, se consiguen precisamente mediante la exportación de hidrocarburos; de otro, porque la seguridad basada en reservas durables haría más difícil el paso a las energías alternativas, lo cual sería un serio limitante a largo plazo.

En efecto, una reserva autónoma latinoamericana –en un contexto de decaimiento de los yacimientos mundiales– elevaría aún más el precio del petróleo, haciendo rentable para Estados Unidos el paso a las energías alternativas que ha venido posponiendo mientras contaba con reservas baratas de crudo; al mismo tiempo, América Latina podría aumentar la dependencia de un bien destinado a desaparecer y fortalecer la dependencia tecnológica a largo plazo.

En una línea similar a PetroAmérica está el gasoducto de Venezuela al cono sur. Este proyecto tiene fundamentalmente un objetivo político más que económico: la integración entre Venezuela, Brasil y Argentina para fortalecer un polo opuesto a Estados Unidos. Tal objetivo sí es alcanzable en el corto plazo.

Carbón y energías alternativas

A medida que se haga más escaso el petróleo, cobrarán mayor importancia las demás fuentes, tanto sucias (carbón) como limpias (eólica, biomasa, etc.). Latinoamérica se puede beneficiar de la exportación de carbón a mejores precios, más aún cuando el crecimiento de China e India seguirá empujando fuertemente la demanda por el mineral.

Del lado de las energías alternativas, es crucial entender que no existe una opción única para Latinoamérica en este campo. La biomasa, por ejemplo, es adecuada en algunas zonas como la Amazonia, mientras que la eólica funciona mejor en otras zonas como la Patagonia o la Guajira colombo-venezolana. A futuro se requiere de una verdadera matriz de energías alternativas que se complementen con el uso de hidrógeno.

Pero el desarrollo de energías alternativas a largo plazo pasa por fomentar su implementación en el corto. Ya hay algunas experiencias incipientes en diversos países como Chile, Argentina y Colombia que son, incluso, comercialmente viables. Un punto importante en este sentido son los biocombustibles, como el bioetanol y el biodiesel, que pueden incluso formar parte de una estrategia de desarrollo social.

El papel social del biodiesel se ve claramente en Brasil, donde la estrategia de Lula se dirigió a la producción del combustible a partir de dos fuentes: palma de aceite e higuera (mamona). Si bien esta última no pasará de ser marginal en volumen de producción, su importancia radica en la generación de empleo en zonas deprimidas como el nordeste.

En conclusión, la integración energética puede contribuir a la integración latinoamericana en la medida en que se fortalezcan los objetivos sociales y de desarrollo, y en la medida en que se aproveche el potencial energético de la zona para fomentar un desarrollo equitativo entre los diferentes países. Metas pequeñas y alcanzables a cargo de entes supranacionales y que den campo de acción a los diferentes países para buscar su propio camino en coordinación con los demás pueden ser el mejor camino a largo plazo. Y no hay que olvidar que los hidrocarburos son un buen punto de partida, pero el punto de llegada está en las demás fuentes.

Bibliografía

Algranati C.; Seoane, J.; Taddei, E. (2004) "Disputas sociales y procesos políticos en América Latina", *Revista Olsal*, año V, nº 13.

Álvarez, Carlos Guillermo (2000) *Economía y política petrolera*. USO. Bogotá.

Baleta López, E. (2006) *Los emberas katíos: un pueblo desgarrado*. Censat.

Bernal, Federico (2005) *Petróleo, Estado y soberanía: hacia la empresa multiestatal latinoamericana de hidrocarburos*. Biblos. Buenos Aires.

Bolpress (2005) "Bolivia: los movimientos sociales conceden un día de tregua al gobierno, el Ejército protege Palacio", mayo 26 de 2005.

- CENSAT-Centro Nacional Salud Ambiente y Trabajo (2003) Taller regional: Energía, comercio y servicios. Efectos y alternativas socioambientales. Censat Agua Viva-Amigos de la Tierra. Santa Marta, 4 y 5 de abril de 2003. Colombia.
- Centro de Estudios Internacionales (2005) Resumen del plenario regional sobre diagnóstico y estrategias. Reunión Regional JS/Américas, La Habana.
- CIER (1997) Proyecto CIER 02. Mercados mayoristas e interconexiones de América del sur. Fase II. Montevideo.
- Corredera, Cecilia; Rosenfeld, Elías (2004) "La energía y el desarrollo argentino a comienzos del siglo XXI. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente", *ASADES*, vol. 8, n° 2, Argentina.
- Cumbre Social por la Asamblea Constituyente (2006) Organizaciones sociales de Bolivia. La Paz.
- De Buen O. Tabasco, 2004. "El clima cálido húmedo y las tarifas eléctricas". *Transición Energética*.
- De la Torre, Carlos (2003) "Movimientos étnicos y cultura política en Ecuador", *Íconos*, n° 15, enero 2003, pp. 62-75.
- Declaración de N'Donhuani Adital* (2006) México.
- Dyner, Isaac; García, Mario; Rincón, Johana (2005) Integración hidrotérmica en Centro y Sur América. Congreso de distribución y transmisión. Mar del Plata, Argentina.
- García-Guadilla, María Pilar (2003) "Sociedad civil: institucionalización, fragmentación, autonomía", en Steve Ellner y Daniel Hellinger (editores) *La política venezolana en la época de Chávez*. Editorial Nueva Sociedad, Caracas.
- García, Mario; Murcia, María Fernanda (2006) Integración energética en América Latina. Mimeo.
- Gómez, M. (2005) *Tierras de carbón: relatos de destierro en La Guajira*. Censat. Colombia.
- Indymedia (2005) "Falta gas y diesel: la gente protesta contra el gobierno y los dirigentes", octubre de 2005.
- Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (2005) *Integración energética Argentina-Brasil*. Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires, noviembre de 2005.
- Foweraker, Joe (1995) "Theorizing Social Movements: Critical Studies", en *Latin America*. Pluto Press. Londres.
- Jiménez, William W. (1998) *Conocimiento, poder y democracia. Una mirada al final del siglo y de milenio*. Escuela Superior de Administración Pública-ESAP. Santa Fe de Bogotá, Colombia.
- Lander, Edgardo (2004) "Venezuela: proceso de cambio, referéndum revocatorio y amenazas internacionales", *Revista OSAL*, año V, n° 13, enero-abril 2004.
- Lapeña, Jorge (2005) "La falta de una política energética", *La Nación*, Buenos Aires, domingo 21 de agosto de 2005.
- Olmedo, Jorge A. (2003) Coloquio Internacional: Integración Energética en el Cono Sur: pausa y nuevo enfoque. Instituto Argentino de la Energía. Buenos Aires, noviembre de 2003.
- Palomino, Héctor; Rajher, Gustavo; Pogliaghi, Leticia; Lascano, Inés (2004) *La política y lo político en los movimientos sociales en Argentina*. Cuadernos de trabajo. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.
- Pérez Gutiérrez, R. (2002) Campaña por la defensa del pueblo y la cultura U'wa Asociación U'wa. CENSAT Agua Viva. Cubará, julio 23 de 2002. Colombia.
- "La paz sobre la mesa" (2002) *Separata Revista Cambio*. Comisión de Conciliación Nacional. Comité Internacional de la Cruz Roja.

- Quiroz, Mauricio (2006) "Huayto-Perú: pueblos conquistan electricidad en movilización del jueves 8 de junio", junio 9 de 2006. <http://valparaiso.indymedia.org/news/2006/06/7683.php>
- Roa Avendaño, T. (2003) En Mompox reina la impunidad ambiental petrolera. CENSAT Agua Viva-FoE. Bogotá, Colombia.
- Roberts, Paul (2004) *El fin del petróleo*. B. Barcelona.
- Tablada, Carlos; Hernández, Gladys (2004) *Petróleo, poder y civilización*. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana.
- Tanaka, Martín (2001) *La situación de la democracia en Colombia, Perú y Venezuela a inicios de siglo*. Comisión Andina de Juristas.
- Vargas Hernández, José G. (2006) *Nuevas expresiones de acción colectiva de los movimientos sociales en Latinoamérica*. University of California, Berkeley.
- Westphal, Kirsten (2006) "Energy Relations in the Wider Region of Europe and the Americas in a Comparative perspective: Going Global or Dominating Regional". Ponencia al Simposio International Relations in Eastern Europe. Working group on East European Societies in a comparative perspective. German Association of Political Sciences.
- Zanoni, José Rafael (1999) "La integración energética latinoamericana", *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, vol. V, n° 1 (enero-junio, 1999), pp. 255-266.
- Zibechi, Raúl (2005) "La difícil relación entre los movimientos sociales y los gobiernos progresistas. Democracia y derechos humanos", *Revista Futuros* n° 9, vol. 3, año 2005.